

## AGENDA CIUDADANA

### CHIAPAS O EL RETORNO DE LOS FANTASMAS

Lorenzo Meyer

**El Ejército y la Iglesia.-** Dos fantasmas salidos de nuestro pasado colonial empiezan a recorrer la geografía mexicana del conflicto. Se trata de la creciente politización de la iglesia católica y de ciertos signos de autonomía política en el ejército. Ambos fantasmas han llegado al conjuro de la decadencia del sistema político.

En el ocaso del sistema político que ha dominado al siglo XX mexicano -- el de la presidencia sin límites y el partido de Estado --, es inevitable que surjan nuevos actores políticos y que algunos viejos se expandan a espacios que hasta hace poco les estaban vedados. En principio, esta pluralidad formada por partidos de oposición, organizaciones no gubernamentales, medios de difusión, etcétera, es lo que requiere y lo que consolida a una modernización de las estructuras políticas. Sin embargo, no cualquier pluralidad es bienvenida; en cada contexto nacional, la acción de ciertos actores resulta menos un indicador de modernidad que de problemas y regresión. La actual crisis chiapaneca -- trágica manifestación particular de un problema mayor -- está colocado en el centro del escenario político mexicano a dos fuerzas de raíces históricas profundas y de ambiguo significado: la iglesia católica y el ejército.

Una de las peculiaridades del régimen postrevolucionario mexicano --ese que se inició a partir de 1917, se consolidó después de 1940, llegó a su etapa clásica en los sesenta y hoy esta en franco deterioro-- fue justamente su capacidad para controlar y marginar de los asuntos políticos sustantivos tanto a la iglesia católica como al ejército y a la armada. Sin embargo, como resultado de la debilidad creciente del régimen y de

los errores repetidos del grupo en el poder, ambas instituciones están hoy en el centro de los acontecimientos políticos y las implicaciones del hecho son de preocupar.

En estricto sentido, iglesia y ejército nunca perdieron su papel de actores políticos en México, pero en los últimos sesenta años ambos debieron aceptar que su papel fuera “de bajo perfil” y subordinado a la lógica y a las necesidades del régimen, en particular de la presidencia y de su partido. Sin embargo, en el río revuelto de los últimos años, ejército e iglesia católica han sido llevados a modificar su rol, haciéndolo más político y aumentando su radio de acción y autonomía.

**La Iglesia Católica.**- Se trata del actor más viejo. Arribó a México a inicios del siglo XVI, cuando aún no se asentaba el polvo y se escuchaba el estrépito producido por el derrumbe y destrucción de las civilizaciones nativas. Dentro de la estructura española, la iglesia fue parte central, muy activa y legítima del sistema político. La modernización del siglo XVIII desembocó en un choque muy serio entre la autoridad civil y la iglesia; ese conflicto continuó y se acentuó en el siglo XIX, debido a la larga resistencia del Vaticano a reconocerle a México la calidad de nuevo estado nacional independiente y al surgimiento del liberalismo. A partir de la aprobación de la constitución anticlerical de 1857, la lucha entre la cruz y la espada fue feroz; finalmente triunfó el poder civil y liberal. Tras la Revolución de 1910 y la promulgación de la constitución de 1917 con su fuerte acento anticlerical, la disputa entre gobierno e iglesia católica se reanudó y condujo a la sangrienta “guerra cristera” de los años veinte y treinta. El anticlericalismo volvió a imponerse, pero los dirigentes del nuevo régimen se vieron obligados a escuchar a la jerarquía católica y a mantener con ella una relación no pública pero sistemática y cuidadosa a pesar de sus diferencias en materia educativa o de control natal.

La crisis de legitimidad que se abrió con las elecciones sin credibilidad de 1988, llevó al presidente Carlos Salinas a reformar la constitución, a darle a la iglesia católica el reconocimiento formal que los revolucionarios de 1917 le habían negado y a restablecer las relaciones diplomáticas con el Vaticano suspendidas por más de un siglo. El *quid pro quo* de esa decisión fue el apoyo activo de la iglesia, en particular del representante del Papa, al gobierno. Sin embargo, ante la persistencia de la debilidad del régimen, la iglesia aprovechó la coyuntura y se lanzó a una especie de reconquista del campo político.

En su nueva empresa, el grueso de la iglesia católica mexicana mantiene la actitud conservadora que le ha caracterizado desde siempre y que es justo lo que el gobierno de Salinas buscó activar en su favor, pero otra parte, minoritaria pero activa, ha optado por consolidar sus bases sociales mediante el apoyo directo a la lucha de los pobres, de los marginados, de los indígenas. Ese es el caso de la diócesis de Chiapas, bajo la dirección del obispo de San Cristóbal, don Samuel Ruiz. Y es ahí donde la iglesia ha chocado no sólo con el gobierno, empresarios, clase media y élites locales, sino con el otro actor que también esta redefiniendo su espacio en época de crisis: el ejército.

**El Ejército.-** Esta institución tiene una historia menos larga que la de la iglesia católica. Surgió modestamente a fines del siglo XVIII pero gracias a la guerra de independencia entró de lleno y al centro de la política. Tras el fin de la larga guerra civil del siglo XIX, perdió mucho de su peso, pero lo volvió a recuperar con el estallido de la Revolución de 1910. La derrota y muerte del ejército de la dictadura en 1914, le dejó todo el terreno al ejército revolucionario, en cuyo interior pronto triunfó la corriente menos popular -- la de Carranza -- tras destruir a la de Villa y Zapata.

Hasta que Lázaro Cárdenas organizó a campesinos y obreros dentro del partido de Estado, el ejército fue la pieza clave de la nueva política mexicana. A partir de 1938, la importancia política del ejército disminuyó, aunque en momentos críticos posteriores, retornó temporalmente al centro del escenario para enfrentar directamente a la oposición electoral (1940 y 1952), a la insurgencia sindical (petroleros o ferrocarrileros), a movimientos ciudadanos independientes (León, San Luis Potosí o el 68), movimientos guerrilleros rurales y urbanos (Guerrero, Monterrey o Ciudad de México en los setenta).

La acción del ejército en defensa del régimen y contra campesinos, obreros, estudiantes o movimientos ciudadanos, siempre se originó en fallas del liderazgo de la clase política. La impericia o corrupción de los políticos profesionales provocaron el incendio y el ejército fue, y sigue siendo, habilitado de bombero para apagar el fuego social. El último de estos episodios es, desde luego, Chiapas, donde tras la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), al ejército nacional se le ordenó asumir el papel de fuerza de ocupación y contrainsurgencia indígena en ese estado.

En el pasado, las emergencias concluían muy rápido y el ejército retornaba a los cuarteles y a las márgenes del sistema político. Sin embargo, ese ya no es hoy el caso. Hoy la emergencia se prolonga, se hace rutina y la jefatura civil del ejército, la presidencia, se debilita. En efecto, la guerra contra el narcotráfico a la que se arrastró al ejército por presión norteamericana, se prolonga ya a lo largo de varios gobiernos y sin que se le vea el fin. El empantanamiento del ejército en el mar de corrupción de las drogas ha hecho que ciertas instancias militares simplemente ya no obedezcan a sus superiores y se sigan por la libre, como fue el caso del jefe de la agencia encargada del combate al narcotráfico, general Jesús Gutiérrez Rebollo. El caso de Chiapas,

donde el problema lleva ya cuatro años y sigue sin resolverse, tiene anclados a 30 mil efectivos en ese estado. Y precisamente en Chiapas hay signos que muestran que son los militares y no los civiles de la secretaría de Gobernación, quienes lleva la batuta. La lógica del comportamiento del gobierno en ese estado sureño se explica más como el desarrollo de una guerra contrainsurgente que no quiere decir su nombre que como una auténtica negociación política, como fue el compromiso del presidente Zedillo al momento de su elección y que fue la especialidad del régimen en sus épocas de esplendor.

La independencia de la acción militar no es clara, pero se percibe en varios hechos: en la relación directa del secretario de Defensa con su contraparte en Estados Unidos, el rearmamento, la preferencia por la captura de la dirigencia del EZLN a la negociación en las frustradas operaciones militares de febrero de 1995, en el rechazo *de facto* del presidente a las iniciativas de negociación de la Cocopa y, últimamente, en el choque directo del ejército con la iglesia, pero no con la conservadora, sino con la otra, con la que se opone a la persistencia de relaciones políticas, sociales y económicas particularmente injustas en Chiapas. Veamos.

**Un Choque que es un Indicador.**- El 9 de enero, el general José Gómez Salazar, comandante de la VII Región Militar, y con motivo de la presentación de un material sin mayor importancia encontrado el 1° de enero en un supuesto puesto de observación del EZLN, -- 3 armas cortas, 11 largas, 1,262 cartuchos, un diario de campaña y varios libros, algunos de tema religioso y uno de ellos escrito por el obispo de San Cristóbal --, declaró: “para nosotros está claro, es obvio que [el obispo Samuel Ruiz] esta involucrado [con el levantamiento indígena de Chiapas]” (Reforma, 10 de enero). Estas declaraciones las hizo el general sin pruebas convincentes para

sustentar tamaña acusación y, lo que es muy revelador, sin recurrir a la tradicional y obligada mediación de las instancias políticas civiles, es decir, la secretaría de Gobernación o la Procuraduría. Además, dada las definiciones que documentos internos del ejército publicados por la revista Proceso (4 de enero) y que sostienen: a) que el objetivo del ejército en Chiapas es “destruir o desorganizar a las unidades regulares...del EZLN” , b) que la teología de la liberación es una “corriente contaminada” y c) que el obispo Samuel Ruiz y los suyos son teólogos de la liberación, trastocadores de “los valores tradicionales” apoyados por el Vaticano y “por la mayoría del clero católico nacional”, entonces no es aventurado inferir que para ciertos sectores del ejército, la iglesia católica ya es considerada como parte del enemigo, como fue el caso en El Salvador.

La reacción pública en contra de la acusación hecha por el general Gómez Salazar contra don Samuel Ruiz obligó al nuevo secretario de Gobernación a hacer una aclaración: el general habló a título personal, pero ¿desde cuando un general en activo, con mando de tropa, puede hacer a título personal acusaciones políticas de gran importancia y sin pruebas contundentes?. Las autoridades civiles han minimizado el incidente, pero lo que no se puede, ni conviene, es minimizar su trasfondo.

Los notorios movimientos del ejército en Chiapas en la zona zapatistas tienen por objeto, se dice, decomisar armas en manos de civiles, en particular de grupos paramilitares para que no vuelvan a cometer nuevas masacres. La razón es muy válida. Sin embargo, ¿como hacer compatible esa explicación con los documentos de Proceso donde se recomienda al ejército preparar a los cuerpos de “autodefensa” o con el documento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (Reforma, 10 de enero), que claramente señala que al momento de ocurrir la infame matanza había,

además de policías del estado, militares destacados en el poblado de Majomut, a 4 minutos 55 segundos del lugar del crimen colectivo, y que a lo largo de las horas que duró la matanza estuvieron en capacidad de oír las detonaciones y no acudieron a averiguar, desarmar y detener a los atacantes?.

**Responsabilidades.-** Por un interés tanto institucional como personal y para evitar el deterioro de la imagen de su gobierno ante los inversionistas extranjeros que tanto necesita, el presidente Ernesto Zedillo debería aprovechar el cambio en el gabinete para hacer a un lado la idea de que el cerco militar, la acción contra las bases sociales del EZLN y el tiempo resolverán el problema chiapaneco, y retomar la vía de la negociación política. La paz es, además, el único camino para que el ejército disminuya su papel como instrumento indispensable para la solución de problemas sociales y políticos y retorne a sus cuarteles, pues es claro que entre más tiempo pase fuera de ellos, mayor la posibilidad de que se desarrollen las pequeñas pero significativas muestras de autonomía que hemos visto.

Por otra parte, si la iglesia católica en Chiapas está cumpliendo el papel de canal de formulación y expresión de demandas de los grupos más desprotegidos y explotados, es porque el sistema de partido de Estado hace tiempo que dejó de cumplir esa función, si es que alguna vez la desempeñó. Hay que acelerar, por tanto, la transición democrática para que sean los partidos, en competencia pacífica, legal y democrática, los canales normales de expresión de indígenas y de los mexicanos todos. Sólo de esta manera la iglesia podrá, con buena conciencia y sentido de la responsabilidad, retornar a su papel de guía espiritual y no de líder político por *de fault*.

